



Al servicio de la Justicia y de la Paz Social

JOSE GILDARDO RAMIREZ GIRALDO

Magistrado

Referencia:	Verbal
Demandante:	JUAN GREGORIO GIRALDO CUELLAR
Demandado:	HERNÁN DARÍO MARÍN HENAO
Decisión:	Confirma auto
Radicado:	05001 31 03 013 2022 00226 01
Auto nro:	027

DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA UNITARIA DE DECISIÓN

Medellín, quince de marzo de dos mil veintitrés

Procede esta Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, contra la providencia emitida el 6 de diciembre de 2022, por el JUZGADO TRECE CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLIN, mediante el cual se DENIEGA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA, dentro del proceso verbal instaurado por JUAN GREGORIO GIRALDO CUELLAR Y/OS en contra de HERNÁN DARÍO MARÍN HENAO Y/OS.

ANTECEDENTES:

En el proceso verbal de la referencia, en auto del 6 de diciembre de 2022 se procedió a efectuar el decreto de las pruebas solicitadas por las partes, providencia en la que se denegó al demandante la valoración del dictamen de pérdida de la capacidad laboral realizado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y concede un término adicional para practicar uno nuevo.

Inconforme con dicha decisión, el apoderado de la parte demandante interpuso de apelación. Sustenta el inconforme su solicitud arguyendo que la prueba pericial no puede estar sometida a verificaciones rígidas y formales, acorde con lo preceptuado en el artículo 168 del C. General del P., pues no se trata de una experticia impertinente, inconducente, inútil, superflua y mucho menos ilícita, ni ilegal, pues su obtención no fue consecuencia del desconocimiento de la normatividad procesal; insistió que el Art. 54 del Decreto 1352 de 2013 no tiene la potestad para regular los juicios de admisibilidad de la prueba y mucho menos comporta una modificación o derogación de los artículos 164, 168 y 174 del C. General del P.; estima que el proceso civil es un medio para procurar la reparación de la víctima y es ilógico que no pueda valerse de una prueba obtenida dentro del proceso penal que versa sobre el hecho, por el contrario es una de las posibilidades que tienen, siempre y cuando se respete el derecho a su contradicción, asunto que no es objeto de discusión.

Con base en lo anterior, solicitó se revoque el auto impugnado y en su lugar se decrete la totalidad de las pruebas solicitadas.

Una vez corrido el traslado establecido en el artículo 326 ejusdem, resulta preciso anotar que en sede de segunda instancia, lo procedente es dar aplicación a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 323 del Código General del Proceso, el cual respecto al trámite de la apelación de autos dispone que: "*Si el juez de segunda instancia lo considera inadmisibile, así lo decidirá en auto; **en caso contrario resolverá de plano y por escrito el recurso***", razón por la cual al no advertirse la existencia de alguna causal de inadmisión del recurso, se procederá de plano a su resolución.

Siendo la oportunidad para resolver a ello se procede previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Ha sostenido la doctrina que: "[en] los distintos ordenamientos, que se refieren a la prueba judicial está la idea de que en el proceso se pretende establecer si determinados hechos han incurrido o no y que las pruebas sirven para resolver el problema..."¹.

De ahí la trascendencia del ejercicio probatorio para acreditar los hechos objeto de la litis, toda vez que al fallador le está prohibido basarse en su propia experiencia para resolver, pues su decisión debe fundamentarse en las pruebas que han sido legal y oportunamente recaudadas y allegadas al proceso, principio este contenido en el artículo 164 del C. General del P.

A su turno, el artículo 168 ejusdem establece que para que la prueba sea procedente, debe revestir unas características, a saber: i) conducencia, ii) pertinencia y iii) utilidad. Sobre la primera de ellas, se sabe que está dada por la idoneidad legal que posee el medio probatorio para acreditar determinado hecho; la segunda, impone que el medio de convicción se relacione con el tema de prueba, esto es, que sirva al propósito de aclarar el objeto de discusión que suscita la controversia, y la última hace alusión a la necesidad de la prueba; es decir, que la misma sea provechosa o valiosa para el proceso, de manera que toda probanza inocua, por bienhechora que sea, ha de rechazarse.

¹ TARUFFO MICHELE, "LA PRUEBA DE LOS HECHOS" Ed. Trotta, 4ª Edición, 2011, Pág. 21

Respecto del dictamen de la pérdida de la capacidad laboral realizada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, es necesario acudir a lo reglado en el artículo 227 del C. General del P. que establece que: *"La parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deberá aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas (...) el dictamen deberá ser emitido por institución o profesional especializado."*

Deviene de lo anterior que, dentro de las entidades especializadas para dictaminar la pérdida de la capacidad laboral, se encuentra la Junta Regional de Calificación de Invalidez, y si bien para la realización del mismo debe acudir a las reglas del Decreto 1352 de 2013; no es menos cierto que en su conformación no participaron todas las partes vinculadas a este proceso, por lo que su contradicción se debe dar acorde con lo reglado en el artículo 228 ejusdem. De otro lado, el artículo 226 ibídem, establece que el dictamen pericial tiene como propósito llevar al juez al convencimiento de hechos que requiere, entre otros, especiales conocimientos científicos, como ocurre en el caso que se analiza, pues la determinación de pérdida de capacidad laboral, requiere de conocimientos que obedecen a las reglas y parámetros establecidos por la ciencia, por tanto, resulta pertinente, conducente y útil para la demostración de la pérdida de capacidad de una persona, específicamente, de quien sufre la merma con ocasión de un accidente de tránsito, hecho jurídicamente relevante en el proceso y tiene un efecto significativo en la demostración de la existencia y cuantificación del daño.

Sin embargo, la iudex a quo negó la prueba con base en el artículo 54 del Decreto citado que a la letra reza: *"...Los dictámenes emitidos en las actuaciones como perito no tienen validez ante procesos diferentes para los que fue requerido y se debe dejar claramente en el dictamen el objeto para el*

cual fue solicitado"; concluyendo que dicha experticia solo tenía validez dentro del proceso penal que ordenó el mismo; argumentación que resulta errada al no fundarse en alguna de las causales que establece la norma procesal para rechazar la práctica de una prueba. Además, resulta desacertado que no se valore tal pericia con base en la norma citada, pues no se trata de una prueba ilegalmente obtenida, al no observarse que la prueba aportada por la parte actora transgreda previsiones adjetivas, en tanto que, contrario a ello, se aportó en la debida oportunidad, esto es, con la presentación de la demanda y como se expuso, resulta útil, pertinente, conducente y no constituye prueba ilícita, de donde se puede deducir que, su aportación al proceso es oportuna y cumple con los criterios de legalidad que orientan el Estatuto Procesal Civil.

En punto al tema la Corte Suprema de Justicia² ha dicho que: *"En definitiva, conforme a lo establecido por la legislación adjetiva, la cual no contempla causales de inadmisión o rechazo temprano de la prueba pericial, es la sentencia el escenario propicio para que el juez valore, de acuerdo a cada caso concreto, el apego del trabajo elaborado por un experto a los requisitos mencionados, pues de su cumplimiento, en mayor o menor medida, se edificará la fiabilidad y el mérito que será otorgado al medio suasorio y su incidencia para la solución de cada causa en particular"*. Todo esto en atención, a la falta de los requisitos del artículo 226 del C. G, del P., pues no genera rechazo del dictamen pericial, los mismos cumplen la finalidad de dotarlo de credibilidad, idoneidad, fundamentación e imparcialidad, aspectos que deber ser apreciados por el juez en la sentencia, como se indicó.

Al margen de lo anterior, los preceptos contenidos en el Decreto 1352 de 2013 no pueden desatender las reglas que, en materia de juicio de admisibilidad probatoria establece el C. General del

² STC 7722/2021

Proceso, lo anterior, acorde con el artículo 1º que dispone: “*Este código regula la actividad procesal en los asuntos civiles (...)*”, y no tiene la virtualidad de modificar, reformar o derogar normas estatutarias, las cuales, por razón de su contenido material solo pueden ser aprobadas, modificadas o derogadas en la forma dispuesta en el artículo 153 de la Constitución Política.

Acorde con lo expuesto, respecto debe la juez seguir los lineamientos establecidos para la contradicción al dictamen, debiéndose revocar la decisión de la juez del conocimiento y en caso de que las demás partes involucradas en el asunto lo controviertan deberá fijar fecha y hora para la citación del profesional que realizó el dictamen de merma de la capacidad laboral para que en audiencia lo puedan contradecir, conforme a lo dispuesto en artículo 228 del CGP.

Corolario de lo expuesto, la decisión del Juez de primer grado será revocada, y en su lugar, se ordenará tener en cuenta en dictamen presentado, la contradicción del dictamen de la pérdida de capacidad laboral del demandante se dará en cumplimiento del canon señalado y las normas que rigen la materia, y su valoración se dará en la sentencia que finiquite la instancia.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN,**

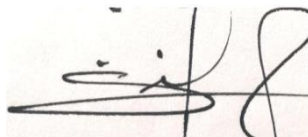
RESUELVE:

PRIMERO. REVOCAR el auto de fecha y procedencia indicado en la parte motiva de ésta providencia, y en su lugar, se **ORDENA** tener en cuenta el dictamen presentado, la contradicción del dictamen de la pérdida de capacidad laboral del demandante se dará acorde con lo reglado en el artículo 228 del C. General del P. y las normas que rigen la materia, y su valoración se dará en la sentencia que finiquite la instancia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia

TERCERO. Para los efectos del inciso final del artículo 323 del C. G del P. se ordena comunicar lo decidido.

NOTIFÍQUESE



(Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022)

JOSE GILDARDO RAMIREZ GIRALDO

Magistrado